

Correo Argentino Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta Nº 420

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

53ª REUNIÓN — 22ª SESIÓN ORDINARIA

14 DE DICIEMBRE DE 1994

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor **EDUARDO MENEM**,

del señor vicepresidente del Honorable Senado,
señor **ORALDO N. BRITOS**

y del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
señor **FAUSTINO M. MAZZUCCO**

Secretarios: doctor **EDGARDO RENÉ PIUZZI** y señor **EDGARDO P.V. MURGUÍA**

Prosecretarios: señor **JUAN JOSÉ CANALS** y doctor **DONALDO ANTONIO DIB**

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
ALASINO, Augusto
AVELÍN, Alfredo
BITTEL, Deolindo F.
BORDÓN, José O.
BRANDA, Ricardo A.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo N.
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CENDOYA, Jorge J.
DE LA RÚA, Fernando
FADEL, Mario N.
GENOUD, José
HUMADA, Julio C.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MARTÍNEZ, Daniel E.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio
MOLINA, Pedro E.
OYARZÚN, Juan Carlos

PEÑA de LÓPEZ, Ana M.
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO, Juan Carlos
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SÁNCHEZ, Libardo N.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
SOLANA, Jorge D.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
STORANI, Conrado H.
VACA, Eduardo P.
VERNA, Carlos Alberto
VILLARROEL, Pedro G.

AUSENTES, CON AVISO:

COSTANZO, Remo J.
FIGUEROA, José O.
JUÁREZ, Carlos A.
RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.
SNOPEK, Guillermo E.

EN COMISION:

LOSADA, Mario A.

POR ENFERMEDAD:

OTERO, Edison

- proyecto de comunicación del señor senador **Romero Feris** por el que se solicita un subsidio para la Asociación Vecinal y Bomberos Voluntarios Vuelta de Rocha, de la Capital Federal (S.-1.072/94). Se aprueba. (Pág. 5235.)
38. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas, de Transporte y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador **Genoud** por el que se solicita el mejoramiento y la pavimentación de rutas en San Rafael, Mendoza (S.-1.076/94). Se aprueba. (Pág. 5236.)
39. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador **Avelín** por el que se solicita un subsidio para la Unión Vecinal San Roque-Cruz de Piedra, San Juan (S.-1.090/94). Se aprueba. (Pág. 5236.)
40. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador **Avelín** por el que se solicita un subsidio para la Unión Vecinal Santa Lucía Centro, de San Juan (S.-1.093/94). Se aprueba. (Pág. 5237.)
41. Consideración del dictamen de la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración del señor senador **Ludueña** por el que se declaran de interés para el Honorable Senado los actos que realizará la Comisión Permanente Pro Día de la Tierra Argentina (S.-1.292/94). Se aprueba. (Pág. 5238.)
42. Consideración del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el proyecto de resolución del señor senador **Losada** por el que se solicita el cumplimiento de los incentivos forestales previstos en el régimen de "Promoción Forestal", respecto de la provincia de Misiones (S.-1.400/94). Se aprueba. (Pág. 5239.)
43. Consideración del dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador **Ludueña** por el que se solicita apoyo técnico y financiero para la sistematización de unidades de producción agropecuaria en Hipólito Yrigoyen, Río Chico, Santa Cruz (S.-1419/94). Se aprueba. (Página 5239.)
44. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se sustituye el primer párrafo del artículo 18 de la ley de impuestos internos (C.D.-79/94). Se aprueba. (Pág. 5241.)
45. Consideración del dictamen de las comisiones de Defensa Nacional, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre servicio militar voluntario (C.D.-53/94). Se aprueba. (Pág. 5242.)
46. A moción del señor senador **Branda** se considera sobre tablas y se acepta la renuncia al cargo de senador nacional por San Luis presentada por el señor senador **Alberto J. Rodríguez Saá** (S.-1.536/94). (Página 5253.)
47. Manifestaciones de la Presidencia respecto de preferencias votadas con anterioridad. (Pág. 5264.)
48. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Agricultura y Ganadería, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador **Massat** por el que se crea el Instituto de Desarrollo Apícola Nacional (S.-638/94). Se aprueba. (Pág. 5265.)
49. Manifestaciones de la Presidencia respecto de preferencias votadas con anterioridad. (Pág. 5267.)
50. A moción del señor senador **Alasino** se resuelve postergar hasta mañana la preferencia acordada para el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica el régimen electoral nacional (P.E.-361/94). (Pág. 5268.)
51. Manifestaciones de la Presidencia respecto de preferencias votadas con anterioridad. (Pág. 5269.)
52. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General, de Recursos Hídricos y de Ecología y Desarrollo Humano en dos proyectos de ley: uno del señor senador **Sapag** y otros señores senadores, y otro del señor senador **Bittel** sobre prevención de inundaciones y control de los cuerpos de agua (S.-565 y 157/94). Se aprueba. (Pág. 5269.)
53. A moción del señor senador **Alasino** se resuelve postergar hasta mañana la preferencia acordada para el proyecto de ley en revisión por el que se ordena la publicación del texto oficial de la Constitución Nacional (C.D.-99/94). (Pág. 5286.)
54. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General, de Familia y Minoridad y de Asistencia Social y Salud Pública en los siguientes proyectos de ley: uno en revisión, otro de la señora senadora **Rivas** y otro del señor senador **Avelín**, sobre Régimen Legal de Identificación del Recién Nacido y su Madre (C.D.-90/94, S.-992 y 1.227/94). Se aprueba el proyecto de ley en revisión con modificaciones. (Pág. 5286.)
55. Manifestaciones del señor senador **Genoud** con respecto al tratamiento de un asunto. (Pág. 5292.)
56. Apéndice:
- I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 5292.)
 - II. Inserciones. (Pág. 5296.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 1 del miércoles 14 de diciembre de 1994:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Britos. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Para una manifestación en minoría tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Señor presidente: quisiera saber cuántos señores senadores hay en la casa.

Sr. Presidente (Menem). — Hay treinta y cuatro señores senadores.

Sr. Britos. — Señor presidente: ya nos excedimos en el tiempo reglamentario.

En consecuencia, solicitaría a los señores presidentes de bloque que busquen la forma para que nuestros colegas se hagan presentes en este recinto.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para formular un pedido.

Comparto lo expuesto por el señor senador por San Luis; pero los presidentes de bloque no podemos hacer otra cosa que exhortar a los señores senadores a que se hagan presentes en el recinto.

Estamos casi a fin de año. La sesión está fijada para las 16 y ya llevamos esperando una hora. Por otra parte, ésta es una situación que se presenta todas las sesiones.

Hay una propuesta de modificación del Reglamento relativa al descuento en las dietas. Las sesiones son los miércoles y jueves; sobre todo los miércoles. Estos son los días fijados y no cuesta nada venir a trabajar y dejar pendientes para el día siguiente las cuestiones que tenemos en el despacho.

El país reclama la sanción de leyes, y creo que todos tenemos una responsabilidad que debemos cumplir. Por ello, más que una gestión por parte de esta Presidencia, pedimos a los secretarios de los señores senadores que nos escuchan que tengan la amabilidad de comunicarles que en el recinto se está esperando su presencia.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia informa además que, como es habitual, se está llamando a los despachos de los señores senadores con el mismo fin.

—Se continúa llamando.

—A las 17 y 8:

Sr. Presidente (Menem). — La sesión está abierta.

2

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Menem). — Invito al señor senador por San Luis don Oraldo N. Britos a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

— Puestos de pie los presentes, el señor senador Britos procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Menem). — Los señores senadores recibieron oportunamente la lista de los asuntos entrados desde la última sesión. En esta instancia podrán formular las peticiones que estimen correspondan a medida que el señor secretario parlamentario dé cuenta de cada uno de ellos.

— La nómina de los asuntos entrados, con las observaciones formuladas, es la siguiente:

I

Comunicaciones de la Presidencia

Decreto del 18 de noviembre por el que se autoriza a los señores senadores Figueroa y Romero a viajar a Siria, desde el 20 al 24 de noviembre con el objeto de acompañar al presidente de la Nación para integrar la comitiva oficial. (D.P.-510/94.) (*A sus antecedentes.*)

II

Acuerdo para la designación del doctor Adolfo Raúl Guzmán como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca. — Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1994.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, al señor doctor Adolfo Raúl Guzmán (DNI 10.733.673).

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.158

CARLOS S. MENEM.

Rodolfo C. Barra.

— A la Comisión de Acuerdos.

en el caso de los vinos finos y champaña, ningún país del mundo desarrollado o que al menos actúe en el mercado comercial de ese tipo de bebidas cuenta con una disposición semejante que, por otra parte, es de vieja data en la Argentina.

Además, en absoluto afecta la fiscalización del producto ni tampoco significa un descontrol por parte del organismo impositivo —la DGI—, toda vez que si bien la estampilla fiscal sirvió hace unos años como un mecanismo de control fiscal, en la actualidad el impuesto que pagan los productores vitivinícolas se abona sobre la base de declaraciones juradas y no a través de esta estampilla fiscal que —diría yo— es una vieja rémora del pasado que no tiene utilidad alguna.

Por lo tanto, la estampilla a la que me estoy refiriendo afecta la estética de los envases, representa un costo inútil para los productores vitivinícolas y es un obstáculo para competir en función de la imagen o presentación de los productos en los mercados internacionales.

Por estas razones solicito que demos la correspondiente aprobación.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Fadel. — Señor presidente: como integrante del bloque PAIS, manifiesto el apoyo al proyecto en tratamiento.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Bordón. — Voy a expresar unas pocas palabras porque ya el senador Genoud expuso las ideas sobre este tema.

Creemos que este proyecto, que tiene origen en el diputado Balter, por Mendoza, y que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, da respuesta a una serie de temas, por un lado de carácter estético, especialmente tratándose de este tipo de productos. También se ha mencionado con precisión que el hecho de mantener este sistema está generando costos adicionales porque hay que implementar modificaciones a la maquinaria habitual para que además se haga este tipo de estampillado.

Por otra parte, algunos hechos que no tuvieron que ver directamente con nuestra producción de vinos finos y campaña, ni tuvieron como responsables a los productores pero sí en algunos momentos a fraccionadores y comercializadores clandestinos e inescrupulosos, llevaron no solamente a que esta Cámara sancionara una nueva política en el campo de los alcoholes para defender más claramente la genuinidad y también la sanidad del producto respecto de los consumidores, sino también —por parte de los pro-

prios productores, como un instrumento de autodefensa de esa genuinidad y calidad del producto— a nuevas metodologías de envases inviolables que pasan también a ser, en alguna medida, contradictorios con este tipo de estampillado.

Muchas veces, eso conduce a la necesidad de costos adicionales para volver a colocar la estampilla. En algunos casos, el costo de tener que pagar por la pérdida o caída ciertas multas que no tienen que ver con la intencionalidad de quien lo ha envasado, sino con esta dificultad de carácter técnico.

Si bien nuestra preocupación fundamental es sobre la genuinidad del producto, también es cierto que sabemos que ninguna actividad sectorial se puede realizar si el conjunto de la economía no funciona correctamente. Uno de los elementos básicos de la economía es el equilibrio fiscal y uno de los objetivos debe ser el de poder mantener los niveles de recaudación con las mismas características que tenían. Creo que al respecto también se ha explayado mi colega y amigo de la provincia de Mendoza, el senador Genoud.

Además, por lo que hemos conversado con el diputado Balter, autor del proyecto, teniendo en cuenta su trayectoria y especialidad de siempre, es evidente que ha tenido un especial cuidado en el tratamiento del tema como el que tenemos nosotros, a los efectos de mantener los mismos niveles de recaudación una vez concretada esta modificación.

Serían muchos más los aspectos para agregar, pero nos parece que esto es más que suficiente para reiterar a esta Cámara el respaldo al proyecto ya brindado por nuestro bloque y que yo, como senador por una de las principales provincias productoras, formulo en este caso.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

45

SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Defensa Nacional, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda en el

proyecto de ley en revisión sobre Servicio Militar Voluntario. (Orden del Día N° 1.052.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Defensa Nacional, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-53/94) sobre Servicio Militar Voluntario; y, por las razones que dará el miembro informante os aconsejan su aprobación.

De conformidad con las disposiciones del artículo 119 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 15 de noviembre de 1994.

*Eduardo P. Vaca. — Julio A. San Millán.
— Juan C. Romero. — José O. Figueroa.
— Fernando de la Rúa. — Luis A. León.
— Deolindo F. Bittel. — Juan C. Oyarzún.
— Pedro E. Molina. — Enrique Martínez Almudevar.
— Julio C. Humada. — Felipe E. Ludueña.
— Alfredo Avelín. — Antonio F. Caffero. — Augusto Alsino.*

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(21 de septiembre de 1994)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Capítulo I

Del Servicio Militar Voluntario

Artículo 1º — El Servicio Militar Voluntario (SMV) es la prestación que efectúan por propia decisión los argentinos varones y mujeres, nativos, por opción o ciudadanos naturalizados, con la finalidad de contribuir a la defensa nacional, brindando su esfuerzo y dedicación personales con las características previstas en la presente ley.

Art. 2º — Los derechos que resguardan la dignidad humana, reconocidos, adheridos y practicados por nuestro país, constituyen la base fundamental de dictado y ordenamiento para las normas particulares de procedimiento, que deberán ser respetados y en su omisión exigidos por todos los ciudadanos. Las leyes, reglamentos militares y convenios internacionales aceptados, que regirán las actividades y comportamientos humanos en el ámbito de las fuerzas armadas, comprenderán y asegurarán los resguardos necesarios a los ciudadanos que

presten servicios en el Sistema Nacional de Defensa, así como también a los objetivos y fines que sean pertinentes con los intereses supremos de la Nación.

Art. 3º — La cantidad de soldados voluntarios que se requiera incorporar y el cupo para cada una de las fuerzas armadas, será fijada anualmente por el presidente de la Nación a propuesta del Ministerio de Defensa.

Art. 4º — Los ciudadanos que decidan realizar el SMV recibirán la capacitación, educación e instrucción para desempeñarse dentro del Sistema de Defensa Nacional y percibirán la retribución que fije el Poder Ejecutivo.

Art. 5º — El soldado deberá respetar el principio de neutralidad política de las fuerzas armadas, y se abstendrá de realizar actividades políticas o sindicales. Ejercerá el derecho a voto de acuerdo a lo que determine la Ley Nacional Electoral.

Art. 6º — Los soldados desarrollarán actividades tácticas, técnicas y logísticas, así como administrativas y aquellas necesarias para el mantenimiento y funcionamiento cotidiano de las unidades, para lo que recibirán la educación e instrucción que se establezca en la reglamentación. No podrán serles encomendadas tareas ajenas al servicio.

Art. 7º — Los soldados estarán obligados al cumplimiento estricto de las leyes y reglamentos militares vigentes y obedecerán las órdenes de sus superiores jerárquicos, que se impartirán conforme a las actividades propias del ámbito institucional específico donde se encuentren incorporados.

Capítulo II

Condiciones generales y beneficios

Art. 8º — Podrán ingresar al Servicio Militar Voluntario, todos aquellos ciudadanos que cumplan las siguientes condiciones:

- a) Ser ciudadanos argentinos varones o mujeres, hábiles, nativos, por opción o naturalizados;
- b) Ser de estado civil soltero;
- c) Tener entre 18 y 24 años de edad;
- d) Tener autorización de representante legal, en caso de ser menores de edad;
- e) Cumplir las condiciones de educación y aptitudes psicofísicas que se establezcan en la reglamentación;
- f) Satisfacer las exigencias que en materia de cursos y pruebas de ingreso se determinen por parte de la fuerza respectiva.

La duración del servicio se establecerá en la reglamentación de esta ley.

Art. 9º — Los ciudadanos que realicen el SMV gozarán de los siguientes beneficios:

- a) Los voluntarios percibirán por la prestación del servicio la retribución mensual, cobertura asistencial y beneficios que se establezcan oportunamente;

- b) Se les otorgarán condiciones preferenciales o puntaje adicional, para su ingreso a la administración pública nacional y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Poder Judicial de la Nación y Poder Legislativo nacional, y para la adquisición de viviendas en los planes nacionales y municipales. Se invita a las provincias a adherirse a lo establecido en el presente inciso y a solicitar a las municipalidades de sus respectivas jurisdicciones seguir igual temperamento;
- c) El cumplimiento del SMV generará a los beneficios y ventajas que fije la reglamentación para el ingreso a todas las fuerzas de seguridad, policiales y al Servicio Penitenciario;
- d) Las fuerzas armadas podrán certificar la capacidad laboral en aquellos casos que desempeñen o sean capacitados para oficios o tareas de aplicación civil;
- e) Se otorgarán facilidades para el ingreso a los institutos militares;
- f) Los años del SMV otorgarán antigüedad a los fines de la jubilación.

Art. 10. — Quienes durante su Servicio Militar Voluntario manifiesten la intención de permanecer incorporados podrán hacerlo de acuerdo a las necesidades de las fuerzas respectivas y a las aptitudes demostradas, hasta los 28 años, en los términos que fije la reglamentación de la presente ley.

Capítulo III

De las reservas

Art. 11. — Las reservas constituirán el componente ineludible del Sistema Nacional de Defensa, su organización, estructura, funcionamiento y capacitación se regirán por la ley que se dicte a tal efecto.

Art. 12. — La reserva del Sistema de Defensa Nacional se convocará con el propósito de completar, cuando así se disponga, los efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, o los efectivos que se asignen a tareas de protección y defensa civil.

Capítulo IV

Responsabilidades y exclusiones

Art. 13. — El planeamiento, dirección y coordinación del proceso para la prestación, registro y verificación del Servicio Militar Voluntario será responsabilidad del Ministerio de Defensa.

Art. 14. — Es responsabilidad de las fuerzas armadas, la instrucción militar de los ciudadanos que se incorporen al Servicio Militar Voluntario, capacitándolos en las actividades tácticas, técnicas y logísticas así como también los administrativos y todas aquellas necesarias para el mantenimiento y funcionamiento de las unidades, asignándoles un rol según los cuadros de organización de cada fuerza.

Art. 15. — Los organismos nacionales, provinciales y comunales, así como las instituciones privadas, tendrán la obligación de proporcionar los informes y datos vinculados a los aspirantes a efectuar el SMV que les sean requeridos por la autoridad competente, en el modo y tiempo que determine la reglamentación.

Los mismos no podrán incluir aspectos políticos, ideológicos o religiosos relativos a la legítima participación de los ciudadanos en asociaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de culto. Los datos obtenidos tendrán carácter estrictamente confidencial y no podrán ser utilizados con ninguna otra finalidad que la permitida por esta ley.

Art. 16. — No podrán incorporarse al SMV aquellas personas que por sus antecedentes penales o policiales puedan constituirse en un riesgo real o potencial para la sociedad.

Capítulo V

Indemnizaciones

Art. 17. — Los haberes y pensiones que correspondan por disminución absoluta o relativa de la capacidad laboral o fallecimiento, ocurridos como consecuencia de la prestación del servicio militar, se ajustarán a lo establecido en la Ley para el Personal Militar y su respectiva reglamentación.

Capítulo VI

Disposiciones generales

Art. 18. — La totalidad de las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley, deberán ser incluidas en la Ley de Presupuesto Nacional, dentro de la jurisdicción del Ministerio de Defensa, en un programa denominado "soldado voluntario" para el que se otorgarán las asignaciones específicas necesarias.

Art. 19. — En el caso excepcional que no se llegaran a cubrir con soldados voluntarios los cupos fijados de acuerdo con el artículo 3º, el Poder Ejecutivo podrá convocar, en los términos establecidos por la ley 17.531, a los ciudadanos que en el año de la prestación cumplan 18 años de edad y por un período que no podrá exceder de un año.

Para realizar la convocatorias el Poder Ejecutivo deberá previamente requerir la autorización por ley del Congreso Nacional, expresando las circunstancias que motivan la solicitud y las razones por las cuales no pudieron cubrirse los cupos pertinentes.

Los ciudadanos que ingresen a las filas de las fuerzas armadas, de acuerdo con lo previsto por el presente artículo, tendrán los mismos derechos y obligaciones enunciados en el artículo 2º y percibirán una retribución equivalente a la establecida en el artículo 4º de la presente ley.

Art. 20. — Los ciudadanos que en la oportunidad de la convocatoria expresada en el artículo anterior, se consideren impedidos para cumplir con la capacitación militar, en razón de profesar profundas convicciones religiosas, filosóficas o morales, opuestas en toda circunstancia al uso personal de armas o a la integración

de cuerpos militares, deberán cumplir el Servicio Social Sustitutorio, por el término que la reglamentación determine, que no podrá ser mayor a un año.

CAPÍTULO VII

Servicio Social Sustitutorio

Art. 21. — El Servicio Social Sustitutorio consistirá en la realización de actividades de utilidad pública, y podrá traducirse en el desempeño de las siguientes tareas:

- a) Actividades de protección y defensa civil, según prescriba la ley respectiva;
- b) Servicios sanitarios, sociales o educativos;
- c) Conservación del medio ambiente, mejora del medio rural y protección de la naturaleza.

Art. 22. — Una comisión constituida en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social y Asistencia a la Comunidad e integrada por representantes de los ministerios de Defensa, de Salud y Acción Social y de Educación y Cultura coordinará, de acuerdo a lo prescrito en la presente ley y su reglamentación, la realización del Servicio Social Sustitutorio.

Art. 23. — La comisión mencionada en el artículo precedente determinará el lugar físico de cumplimiento del Servicio Social Sustitutorio en cada caso, tendiendo a materializar su incorporación en una zona cercana a su domicilio.

Art. 24. — Los ciudadanos que realicen el Servicio Social Sustitutorio no podrán realizar actividad pública o privada alguna ajena al aludido servicio mientras dure éste.

No podrá ejercer actividad política ni sindical alguna sino fuera de las horas y lugares donde cumplan el referido servicio. El ejercicio del derecho de huelga es incompatible con las obligaciones emergentes del mismo.

Art. 25. — Durante el cumplimiento del servicio a que alude este título, los objetores de conciencia tendrán derecho a alimentación, vestimenta, transporte, atención de la salud, y reserva del puesto de trabajo. Las prestaciones a que alude este artículo, serán proporcionadas a las personas ayudadas por el organismo que emplee sus servicios.

Art. 26. — En caso de guerra o de conflicto armado de carácter internacional, el Servicio Social Sustitutorio consistirá en el desarrollo de actividades de protección y defensa civil, en la colaboración con la prestación de servicios públicos y trabajos de utilidad general. Dichas tareas podrán importar aspectos riesgosos, de manera tal de asegurar la igualdad de los ciudadanos ante el peligro común.

Art. 27. — Los ciudadanos que cumplan el Servicio Social Sustitutorio quedan sujetos al siguiente régimen de infracciones y penalidades:

1. El que habiendo sido comprendido dentro de lo dispuesto en el presente capítulo, rehúse cumplir con el Servicio Social Sustitutorio, siempre que no constituya delito más grave, será penado con prisión de dos a cuatro años e

inhabilitación absoluta durante el término de la condena.

2. Serán reprimidos con recargo de servicio de uno a seis meses, si el hecho no constituyera un delito más severamente penado:

- a) Quienes no se presentaren a retomar tareas después de haber vencido el término establecido por la autoridad competente para ello;
- b) Quienes incurrieran en negligencia en el cumplimiento de las tareas que le fueran encomendadas;
- c) Quienes rehusaren cumplir una orden que legalmente les fuera impartida durante el cumplimiento del Servicio Social Sustitutorio, sin causa justificada;
- d) Quienes faltaren el respeto a las autoridades encargadas de la dirección o supervisión del servicio;
- e) Quienes perturben de cualquier modo el orden y la disciplina en el cumplimiento del Servicio Social Sustitutorio.

3. El que no se presentare en la fecha fijada por la autoridad competente para el cumplimiento del Servicio Social Sustitutorio a cumplir con las obligaciones que éste le impone, sin causa justificada, cumplirá un recargo en el cumplimiento de dicho servicio de 4 días por cada día de retardo en su presentación, hasta un máximo de 2 años.

Art. 28. — Las infracciones contempladas en los incisos 2 y 3 darán lugar a la formación de un sumario administrativo, el que tramitará de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de investigaciones vigente en la administración pública nacional. De las decisiones que se dictaren en el mismo, podrán ellos o su representante legal interponer recurso judicial directo por antelación del servicio, el que deberá ser interpuesto y fundado por el recurrente de la decisión administrativa definitiva. Regirá supletoriamente respecto del trámite del recurso de apelación contra sentencia definitiva en proceso ordinario del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 29. — En tiempo de paz los ciudadanos que cumplan el Servicio Social Sustitutorio quedarán sujetos en el caso de cometer infracciones, a la jurisdicción federal.

En tiempo de guerra o conflicto armado de carácter internacional, quedarán sujetos a la jurisdicción militar, rigiéndose por el Código de Justicia Militar.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones transitorias

Art. 30. — La presente ley será reglamentada dentro de los sesenta días de su promulgación.

Art. 31. — El Poder Ejecutivo dispondrá lo necesario para la puesta en vigencia de la presente ley, dentro de los sesenta días de aprobada su reglamentación.

Art. 32. — Deróganse aquellas disposiciones contenidas en las leyes 17.531, 18.488, 18.673, 19.902, 20.428,

21.903, 22.944' y cualquier otra norma en todo aquello que se oponga a la presente ley, quedando sin efecto toda sanción aplicada o por aplicarse a aquellos ciudadanos que estuvieran comprendidos en infracciones previstas en las leyes mencionadas precedentemente.

Art. 33. — Se eximirá del Servicio Militar Obligatorio a todos aquellos ciudadanos que al momento de promulgarse la presente ley se les haya otorgado la prórroga prevista en el régimen anterior.

Art. 34. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

ACLARACION

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde a varios proyectos presentados por distintos diputados.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Sr. Vaca. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Vaca. — Señor presidente: en este momento iniciamos el tratamiento del proyecto de ley enviado en revisión por la Cámara de Diputados a través del cual daremos forma al nuevo servicio militar argentino.

Antes de entrar en la consideración del texto propuesto, me permitiré hacer algunas reflexiones que no por repetidas son menos importantes y que, dada su trascendencia, es conveniente que las reiteremos.

Los argentinos estamos viviendo, desde el punto de vista de la seguridad, una situación dual. Por un lado vivimos en un mundo caracterizado por la incertidumbre. Una vez concluida la guerra fría, es tan grande la velocidad de los cambios que se van produciendo y la cantidad de tensiones que estos cambios generan que sería de suma audacia predecir el estado histórico subsiguiente a partir de un intento de definición del presente.

En muchos casos —y lamentablemente basta con encender el televisor una noche cualquiera para comprobarlo— estas tensiones se ven resueltas de manera armada, es decir a través de la violencia militar.

En contraste con esta situación, los argentinos vivimos en una región que se caracteriza precisamente por la previsibilidad en materia de seguridad. La vigencia de regímenes democráticos en todo el continente, y particularmente en la región del cono sur, hace que la toma de decisiones responda a un mecanismo que puede se-

guirse detalladamente y que constituye el factor principal de la previsibilidad de la política de los Estados.

Estas circunstancias, sumadas a expresas políticas de integración llevadas adelante por casi todos los Estados de la región, hacen que los argentinos vivamos con la sensación cierta de que, hoy por hoy, no estamos sometidos a amenaza militar importante alguna. Pero de todos modos, creo que no podemos obviar que este mundo es cada vez más pequeño y que nos vemos atraídos por los procesos benéficos y por los procesos disolutorios que se están llevando adelante en el planeta.

En consecuencia, más allá del ideal kantiano de paz perenne, lo cierto es que vivimos en un mundo de amenazas permanentes.

Por estas razones, la existencia de las fuerzas armadas sigue siendo una imperiosa necesidad del Estado moderno. Las fuerzas armadas constituyen una especie de seguro, pero con una pequeña diferencia: cuando uno contrata un seguro de vida desea, por supuesto, no usarlo nunca; pero finalmente, cuando la crisis se produce, el seguro actúa. Este es uno de los modos en que este seguro, constituido por las fuerzas armadas, se manifiesta. Pero también existe un modo más importante en que este seguro puede manifestarse y consiste en el hecho de que la sola presencia de las fuerzas armadas —adecuadamente organizadas, debidamente provistas y convenientemente conducidas— hace que nunca sea necesario utilizar la póliza de seguro porque las fuerzas armadas han resuelto su principal cometido, que es conservar la paz mediante la disuasión de cualquier amenaza.

Esta situación que vive el continente ha hecho que algunos sectores de la ciudadanía pensaran en la falta de necesidad de las fuerzas armadas. Por eso dije que me parecía importante reiterar la absoluta necesidad de que la Argentina mantenga sus fuerzas armadas.

Más allá del avance tecnológico, en las fuerzas armadas sigue habiendo un elemento absolutamente irremplazable, que es el humano. Aún no hubo desarrollo tecnológico suficiente como para decir que podemos prescindir del elemento humano; y en las fuerzas armadas en particular este componente continúa siendo masivo. Se requiere de la participación de importantes masas de hombres para que las fuerzas armadas puedan cumplir adecuadamente sus propósitos.

El modo en que este organismo ha resuelto el tema de la masa humana necesaria para poder cumplir con sus finalidades ha tenido diferentes matices a lo largo de nuestra historia.

El Ejército Argentino surgió como precarias milicias en la primera década del siglo pasado ante la amenaza británica. La Armada, por su parte, nació básicamente de la contratación de oficiales y marineros extranjeros y contó también con la participación de soldados del Ejército.

A partir de entonces y durante casi todo el siglo, la gente fue incorporada mediante el mecanismo de la leva, que según la región y la adhesión al caudillo era más o menos forzada o más o menos voluntaria de acuerdo con el ángulo con que uno quiera mirar el problema.

Llegamos así a 1852, en que se originó la Guardia Nacional de la que participaban ciudadanos que recibían instrucción militar pero que no integraban institucionalmente las fuerzas armadas.

El reclutamiento y su intensidad fueron variando según los requerimientos o necesidades militares de aquellas épocas. Así, hubo períodos especiales como el de la guerra que sostuvimos con el Paraguay o el de la amenaza de inminente estallido militar con Chile, allá por 1895.

Y llegamos a principios de este siglo cuando se da inicio a un interesantísimo, rico y extenso debate entre los proyectos Capdevila y Ricchieri. Finalmente se impuso este último, que estableció el servicio militar obligatorio y que fue el que, con algunas modificaciones de carácter instrumental, rigió hasta este año.

Era evidente que la sociedad en su conjunto, con mayor o menor énfasis, reclamaba un cambio en este régimen. Y ello se debía a diversas razones: porque cortaba la posibilidad de desenvolvimiento laboral de los jóvenes, porque interrumpía el desarrollo normal de los estudios y porque, en algunos casos, se llevaban adelante malas prácticas que hacían que la misión que se pretendía cumplir con la instrucción militar no fuera la que se derivaba del servicio.

Pero hay que reconocer también que este régimen de la ley Ricchieri fue instrumento vital para la integración del país, para su democratización y para la salud de los ciudadanos. Fue un instrumento importante para la masividad de la educación en la Argentina. Si la República se distinguió por su bajo nivel de analfabetismo, seguramente el servicio militar de la ley Ricchieri fue un elemento sustancial para lograr esas cifras.

Pero a pesar de todo esto, la sociedad argentina nos empezó a plantear la necesidad de cambiar el régimen. Incluso, sectores especializados lo propusieron desde la perspectiva de hacer más eficaz y eficiente la acción desempeñada por los soldados.

Es así que desde la reinstalación del régimen constitucional se presentaron tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores muchísimos proyectos en los que se planteó la necesidad de modificar el régimen de la ley Ricchieri.

Podemos decir que en general el debate transcurrió no en cuanto a la eliminación del servicio militar obligatorio sino a la necesidad de una adecuación, fundamentalmente en dos aspectos: uno, referido a la duración del servicio militar y el otro, vinculado con la necesidad de contemplar aquellos casos de ciudadanos que, por razones de carácter religioso, filosófico o moral, se negaban a prestar el servicio de armas. Estos fueron los dos elementos básicos que movieron a la necesidad de transformar el servicio militar.

Lamentablemente, en abril de este año se produjo el episodio del soldado Carrasco que todos conocemos bien. Esto determinó una aceleración del proceso social por el cual se demandaba un cambio en el régimen.

El presidente de la República, con gran sensibilidad a esta demanda, anunció el fin del régimen de la ley Ricchieri y la adopción de un sistema fundado en el soldado voluntario y retribuido con paga.

El señor presidente tomó estas disposiciones basándose en instrumentos legales que lo habilitaban al efecto. La propia ley de servicio militar que hoy estamos derogando, sumada a la ley del personal militar, constituyeron los elementos en función de los cuales el presidente dictó el decreto que planteó el desarrollo del sistema que hoy estamos considerando.

De todos modos, este Congreso estimó necesario completar dicho decreto con una norma del más alto rango, de modo de cubrir algunos aspectos que por su propia naturaleza aquél no podía contemplar. Fue así que en la Cámara de Diputados se presentaron varios proyectos. Hoy estamos considerando uno que las comisiones que han tenido que estudiar el tema recomiendan a esta Cámara sancionar sin modificaciones.

Si la memoria no me engaña, el proyecto en cuestión consta de ocho capítulos con 34 artículos. Simplemente para refrescar la memoria de los señores senadores voy a hacer una rápida referencia a su contenido.

El Capítulo I está referido al servicio militar voluntario. Aquí me parece importante destacar, más allá de las definiciones del artículo 1º, el contenido del artículo 2º, donde se pone particular énfasis en la necesidad del respeto a los derechos humanos.

En el mismo capítulo se determina que el cupo de soldados que se requieran será responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Defensa. Se establece que los voluntarios percibirán un sueldo, conservarán el derecho a voto y se establecen las funciones así como también la obligación de cumplir con las leyes y reglamentos militares.

El Capítulo II establece las condiciones generales y beneficios de que gozarán los soldados voluntarios. Hay un artículo que determina quiénes podrán ingresar y en el siguiente se indican cuáles son los beneficios.

El Capítulo III en realidad todo lo que hace es abrir las puertas a una ley que en su oportunidad este Congreso deberá sancionar; trata sobre las reservas. Simplemente lo que hace este capítulo es subrayar la importancia fundamental que tienen las reservas en el sistema defensivo que se ha ideado para la Argentina, y que ya está previsto en el régimen establecido por la ley de defensa.

En el Capítulo IV se establecen las responsabilidades y exclusiones. Me parece importante destacar esto porque la sociedad ha tenido miedo frente al régimen del servicio voluntario del soldado profesional. Yo he oído preguntarse a muchos qué va a ocurrir con tantos hombres formados en el manejo de las armas y que durante tanto tiempo han estado prestando el servicio militar. Por eso la ley es particularmente cuidadosa en determinar la imposibilidad de participar en el servicio militar voluntario para aquellos que registren, por ejemplo, antecedentes penales.

Conversando con autoridades militares, señalábamos que de ahora en más, tanto o más importante que la investigación físico-médica que se le hace al soldado será la investigación ambiental que se haga del futuro postulante.

En el Capítulo V se establecen las indemnizaciones. Esto remite a la ley del personal militar.

Luego viene el Capítulo VI sobre disposiciones generales, y aquí hay algunas importantes para señalar. El artículo 18 establece que la previsión presupuestaria ha de constar en un programa especial. El propósito de este artículo es evitar que otros recursos de las fuerzas deban ser derivados a este nuevo régimen, de tal manera que no se perturbe la normal actividad de la fuerza desde el punto de vista presupuestario.

Hay otra norma que ha resultado algo polémica, que autoriza a la convocatoria, en caso de que fuere necesario, de soldados reclutados obligatoriamente. Pero la sociedad debe quedarse

tranquila porque esto no podrá ser una decisión unilateral del poder administrador. Este deberá requerir al Congreso una ley especial que autorice en cada caso el reclutamiento obligado de soldados, y tendrá que fundamentarlo adecuadamente.

Y luego, si este Congreso, que es la expresión plural política de la sociedad argentina, considera que el pedido del Poder Ejecutivo es adecuado, recién en ese momento podrá ponerse en vigencia el reclutamiento obligatorio.

Y en lo que respecta a la clase 1976, que es la que debería prestar el servicio militar el año próximo, la absoluta garantía de que no deberá hacerlo es que este Congreso no tiene en tratamiento la posibilidad de reclutamiento obligatorio y sancionará este proyecto de ley en el día de hoy.

Juntamente con la circunstancia de dejar abierta la posibilidad del reclutamiento obligatorio, era lógico cubrir el reclamo de aquellos ciudadanos que por razones de tipo moral, religioso o filosófico se negaran a cumplir el servicio de armas. Entonces, hay una serie de normas referidas a esta situación de los objetores de conciencia que, en caso de ser necesario, tendrán que prestar un servicio social sustitutivo que es tanto o más exigente que el servicio militar obligatorio, razón por la cual estimo que aquellos ciudadanos que apelen al recurso de la objeción de conciencia lo harán sinceramente y no como un mecanismo para eludir una responsabilidad ciudadana.

Finalmente, en los artículos 32 y 33 se dejan sin vigencia las posibles sanciones por infracciones a la anterior ley del servicio militar y se da por cumplido el servicio militar de aquellos que hubiesen pedido prórroga.

Creo, señor presidente, que con este proyecto de ley cubrimos una necesidad. La sociedad en su conjunto la reclamaba, el Poder Ejecutivo oportunamente dio su respuesta y hoy el Senado, estimo que unánimemente —dado que el dictamen de comisión ha sido firmado por todas las bancadas—, se sumará a esta reivindicación del conjunto de nuestra sociedad.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Señor presidente, señores senadores: esta circunstancia permite que apoye este proyecto de ley, pero quiero rendir un sincero homenaje al servicio militar obligatorio. Creo que ha sido de gran utilidad para todo el país.

Y quiero recordar algo importante que deseo traer a colación. Fui aspirante a oficial de reserva

he hice el servicio militar en plena cordillera de los Andes: allí donde el país se ve transparente e iluminado por la fuerza de sus convicciones y por la fuerza de una plenitud de patria y de conciencia ante la obligación de cumplir con el servicio militar. Había estudiantes y obreros, hacendados de Santiago del Estero, hombres del sur y del norte del país, todos integrados y amando a la República, jurando por nuestra bandera, queriendo todavía más a nuestra querida patria en la disciplina militar.

Allí se aprenden muchas cosas que, a lo mejor, no se aprenden en la vida rutinaria. Por eso, mi homenaje y agradecimiento al Ejército Argentino; que, con errores, cumplió con la patria, libertó medio continente americano y es una expresión fundacional en la vida de nuestras instituciones. No podemos olvidar al servicio militar obligatorio, donde estuvo integrado todo el pueblo: muchos ignorantes, hombres de pueblo y muchos cultos y académicos. Todos entremezclados soñábamos con la patria, demostrábamos que la queríamos y recibíamos también el mensaje de la disciplina militar. Por eso reitero mi homenaje al servicio militar obligatorio.

Asimismo, pretendo que estemos dispuestos a defender a la República ante cualquier eventualidad, porque sin defensa no se es República y podríamos quedar sometidos permanentemente a los intereses de los poderosos. No queremos la defensa para penetrar en algún país; la queremos con tecnología moderna y con una buena predisposición de ánimo de todos los argentinos para defender nuestro patrimonio cultural, nuestra geografía, nuestros límites y todo lo que significa defender la tradición heredada de nuestros mayores.

A pesar del nuevo régimen que va a tener nuestro país, no quiero dejar de señalar que el anterior era importante porque en él había mucha transparencia, generosidad, desinterés y patriotismo. Considero que vale que dejemos entado ese patriotismo ante las futuras generaciones, para que siempre estemos dispuestos a la convocatoria — más allá de que lo contemple la Constitución — en defensa de los intereses de la patria. Ese será nuestro mérito: inducir a los jóvenes de hoy y del mañana en el sentido de que nuestra patria se la defiende queriéndola, jurando la bandera y teniendo presente en nuestros corazones y en nuestras conciencias el deber de saber cumplir con el mandato histórico de defender todas las causas nacionales.

Este homenaje es para los soldados que hicieron el servicio militar obligatorio, muchos de

los cuales murieron defendiendo a la Nación. Para esos soldados, para la oficialidad y para la suboficialidad va mi reconocimiento porque, por encima de errores cometidos, han estado siempre al servicio de la causa nacional y juraron por la bandera de la patria, como lo hicimos nosotros en aquella cordillera, desde donde se observan y se contemplan mejor todas las expresiones de la República.

Con estas palabras y conceptos, dejo rendido este homenaje para que quede registrado en este Honorable Senado.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco, del bloque radical.

Sr. León. — Estamos considerando un proyecto que trata sobre un importante tema: la defensa de la Nación.

La defensa nacional es un gran manto que cubre aspectos que van desde la producción hasta algo verdaderamente trascendente como es la soberanía de los argentinos.

En este caso, tengo la sensación de que estamos considerando un proyecto de ley que, en alguna medida, es producto de circunstancias políticas. El dolor que significó para nosotros el hecho de que no se esclareciera la muerte de un muchacho argentino en un cuartel sembró una gran duda en la Nación. Así, surgió la posibilidad de crear un servicio militar no obligatorio. Como lo dijo el señor senador Avelín, en muchos aspectos arañó, custodió y tocó valores patrióticos. Pero existe la sensación de que en nuestro país todo gira sobre un centro económico; sobre una actitud — casi podría decir — de financiamiento. Entonces, debemos elaborar esta norma con gran cuidado, porque muchas de las cosas que se dijeron de ella tuvieron un matiz político. Incluso cuando en el Congreso, en oportunidad de su argumentación, había espíritu de votarla, nos encontramos con un apurado decreto presidencial, para después utilizar esto como bandera política.

Señor presidente: en problemas de defensa no hay banderas políticas. Tenemos que unirnos, solidarizarnos, comprender que lo que estamos custodiando tiene otra significación y está por encima de los partidos.

Nuestro bloque votó afirmativamente porque creyó que la iniciativa podría constituir un importante experimento para la defensa nacional.

Este proyecto de ley que estamos considerando, en su Capítulo II, establece que los voluntarios deberán ser ciudadanos argentinos, mujeres o varones, hábiles, nativos, por opción o naturalizados; deben ser solteros; tener entre 18

y 24 años; cumplir las condiciones de educación y aptitudes psicofísicas que se establezcan en la reglamentación; satisfacer las exigencias que en materia de cursos y pruebas de ingreso se determinen por parte de la fuerza respectiva. Por otra parte, indica que la duración del servicio se determinará en la propia reglamentación de la ley.

Entre otras cosas se establece que los voluntarios gozarán de algunos beneficios tales como que las fuerzas armadas podrán certificar la capacidad laboral en aquellos casos que desempeñen o sean capacitados para oficios o tareas de aplicación civil. Asimismo, se otorgarán facilidades para que los voluntarios ingresen en los institutos militares; y se indica que los años del servicio militar voluntario otorgarán antigüedad a los fines de la jubilación.

Los ingresantes podrán permanecer en las fuerzas armadas hasta los veintiocho años.

La cantidad de soldados voluntarios que se requiera incorporar y el cupo para cada una de las fuerzas armadas serán fijados anualmente por el presidente de la Nación. Percibirán la retribución que fije —también— el Poder Ejecutivo.

Señor presidente: en este momento nos enfrentamos con un alto grado de desocupación y de cierre de fábricas; con un presupuesto que aparece raquítico a efectos de cumplir sus propias previsiones; con la incorporación a nuestras fuerzas armadas de voluntarios que, por ahora —y hasta que no se reglamente esta norma—, no saben cuánto van a ganar.

Nuestro bloque —los radicales— ha votado a conciencia porque tiene la sensación de que se trata de una instancia que permite afirmar la decisión de defender el país. Y ahí es donde yo creo que debemos incentivar nuestra preocupación.

Considero que nuestra Nación en este momento no cuenta con una estrategia de defensa nacional totalmente coherente. Existe desentendimiento entre el propio gobierno y algunos sectores de las fuerzas armadas respecto de cómo van a cobrar los voluntarios; de cómo va a funcionar su capacitación; de qué respuesta podrán dar a través del mecanismo que la nutra en el propio valor de la defensa nacional.

El otro día decía que uno de los argumentos de las privatizaciones en el área de defensa nacional era que las empresas siguieran produciendo para la defensa.

Citaba el caso de una empresa —una de las mejores—, que tenía el mejor laminador de América latina, que después de comprar una empresa argentina en bajo costo vendió toda su parte a una empresa chilena.

Entonces decía que si las privatizaciones en el área de defensa permiten que los que compren con bandera argentina transfieran a los de banderas extranjeras, por más vecinos que sean, pueden debilitar el contenido de nuestra defensa. Así, en lugar de ser una privatización que sirve a una replanificación o a una modernización de algunos esquemas de poder, termina siendo una desregulación.

Todos hemos leído en los diarios de estos días la polémica que hay entre el ministro de Economía, el de Defensa y algunos sectores militares. Hoy nos enteramos de que un decreto del primero crea una especie de banco dentro del propio esquema económico de la Nación y que todas las cuentas que se manejaban con alguna independencia van a depender de este banco. Y ello a punto tal que se publica que los organismos de defensa van a cobrar casi día por día, cuando antes se les dijo que iban a cobrar con cheque.

Pero lo que a mí me preocupa es que estamos por crear un cuerpo que va a insertarse en el campo de las fuerzas armadas. Y éstas, al margen de nuestras diferencias desde el punto de vista de la democracia o el autoritarismo —y espero que ya no se dé más un debate de este tipo en la historia argentina, porque nos duele a todos—, habían presupuestado de mutuo acuerdo un proyecto de gastos. Y son los que están en el presupuesto de este año.

El proyecto final del presupuesto 1995 presentado al Congreso incluyó la cantidad de 85 millones de pesos en el rubro de gastos e inversiones. Se aprecia más o menos que el sistema militar voluntario recibiría 76 millones de pesos, que corresponden a una parte proporcional del presupuesto global destinado a atender este sistema militar.

Con esto se totalizan 161 millones de pesos, siendo la diferencia en menos, con respecto a la considerada anteriormente de sobrevivencia de las fuerzas armadas, de 34 millones de pesos.

Yo tendría que decir que las fuerzas armadas sobre todo el Ejército, de acuerdo con el presupuesto destinan hoy para gastos de personal un 80 por ciento y para gastos de funcionamiento el 20 por ciento. Todos los países integrantes de la NATO tienen 60 por ciento para gastos de personal y 40 por ciento para funcionamiento.

Lo que me preocupa es que estamos creando un cuerpo —luego voy a leer algunas cifras— que se inserta en un debate donde las necesidades de las fuerzas armadas no estarían contempladas en su totalidad. Por ejemplo, para ir a

datos que tengo anotados, el presupuesto techo impuesto por el Ministerio de Economía lleva los gastos de 131 a 85 millones de pesos. En una partida del presupuesto, la 2.1.5., quedan contemplados los gastos de calefacción, siendo lo solicitado 2.535.532 pesos, mientras que lo otorgado por Economía asciende a algo más de 35.000 pesos. La diferencia es de 2.500.000 pesos.

En concepto de racionamiento —gasto importante— lo solicitado por los organismos militares asciende a 23.725.161 pesos; lo otorgado, a 7.581.350 pesos. Vemos que la diferencia es de algo más de 16.000.000 pesos.

La partida 2.2.2. está destinada a vestuario. Se piden 5.930.509 pesos y sólo se otorgan 509 pesos. Quitan 5.930.000 pesos.

En la partida correspondiente a helicópteros —algo lógico dentro de las fuerzas armadas—, se solicitan 3.108.444 pesos, mientras que Economía entrega 6.444 pesos, de manera que sacan 3.102.000 pesos.

En la partida 4.3.3. se contempla el equipamiento en sanidad, tan importante dentro del Ejército. Se reclaman 500.000 pesos y se entregan 10.000 pesos, de manera que la diferencia es de 490.000 pesos.

Entonces, mi preocupación es que estemos saliendo un poco del problema presupuestario de las fuerzas armadas, que hay que conjugar con la crisis de confiabilidad producida por el episodio ocurrido en Neuquén.

Creo que en lo que no debe haber dudas es en que debemos tener una estrategia nacional de defensa que no sea circunstancial. Digo esto porque para mí defensa es también producir trigo, mantener industrias, servir a la tecnología y a la biotecnología. Creo que en alguna medida todos aceptamos que el país no privilegia durante este año este tipo de prospecciones o proyecciones, no sólo en defensa sino también en otras áreas.

El presupuesto que próximamente debatiremos no aumenta, por ejemplo, los gastos de educación; aumenta, sí, algunos gastos sociales.

Sobre el sistema de servicio militar voluntario —que fue muy publicitado cuando empezó— se dijo que los aspirantes iban a exceder el cupo, pero vemos que ahora falta gente. Se culpa hoy a la falta de publicidad. Honestamente, no creo que pueda elaborarse un esquema de defensa sobre la base de un esquema de publicidad frente a la opinión pública. Tiene que haber otros contenidos para incorporar gente a las

fuerzas armadas que no sean la imagen, la figura o la música que se utilizan en la televisión.

Yo hablaba del sistema de cuenta única del Tesoro, un organismo creado por el Ministerio de Economía para controlar el gasto público. Creo que no se puede controlar diariamente el gasto de las fuerzas armadas, que deben hacer maniobras, que están en distintas partes del país, que cubren el escenario de todo nuestro territorio.

Nosotros vamos a votar con la ilusión de que esto es incorpore. Esperamos que el resultado sea positivo, pero no deja de ser un pequeño experimento.

Estoy de acuerdo con el señor miembro informante sobre algunas de las cosas que dijo acerca de la significación de la defensa. Pero es evidente que nosotros estamos votando un proyecto de ley que pareciera que más que producto del análisis de los sectores militares, el gobierno, los legisladores, pensando en la Nación como un conjunto y en los valores que tenemos que defender, tiene que salir antes de las elecciones.

Por algo llenaron las plazas de la República diciendo: "Se terminó la colimba". Es un mensaje para el que tenía que madrugar, para el que no quería ser mandado. Estoy de acuerdo en que hay que buscar un mecanismo, pero aquí en este proyecto prohibimos a los voluntarios hacer política y manifestar sus ideas. Este es un tema que habría que estudiar, porque yo sé cómo es una disciplina militar. Pero van a ser voluntarios, no van a ser soldados. Van a tener la disciplina del soldado. Ojalá que esto funcione realmente bien y que sirva para que el país vaya enfrentando con éxito un problema fundamental de defensa.

Sé que en la Cámara hay apuro por seguir con nuestro trabajo, por lo cual voy a dar por terminada esta intervención. Pero quería decir que desde que empezó el tema, los militares, los civiles, el gobierno, todos fueron corrigiendo su propio pensamiento. Dijeron que iban a sobrar los voluntarios y ahora faltan. Dijeron que el servicio militar voluntario podía fracasar si no había aumento salarial para el personal militar. El presidente de la Nación dijo que no iban a faltar fondos.

Yo una vez dije en este recinto: "¿Qué ley de defensa vamos a tener si hay ladrones en el Banco Central?" ¿Y si cae nuestra producción, y si caen los niveles de desarrollo intelectual de los argentinos? Ha avanzado el analfabetismo en nuestro país. Debemos tener en cuenta esto, pues un soldado educado es —lógicamente—

mucho más importante que un soldado sin educación.

También es importante la salud. Cuando convocaban a los futuros soldados en mi provincia, el 40 por ciento de los muchachos estaban infectados por el mal de Chagas. Es decir que este porcentaje de personas no comprendería a eventuales soldados útiles.

La idea nuestra es dar el voto favorable a este proyecto, pero debemos elaborar una política de defensa nacional que no sea para ver si se termina "la colimba"; que sirva para que el país tenga realmente una política, no para meter miedo sino para custodiar valores fundamentales de nuestra Nación.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut, bancada de la Unión Cívica Radical.

Sr. Solari Yrigoyen. — Señor presidente: considero que la creación del servicio militar voluntario a través de este proyecto de ley es un buen aporte para fortalecer los fundamentos civiles de nuestra sociedad. Pone punto final en algunos aspectos al servicio militar obligatorio, del cual yo he sido ferviente opositor, como lo testimonian los proyectos que he presentado en esta Cámara solicitando su abolición desde hace varios años.

No voy a asumir una actitud maniquea para juzgar al servicio militar obligatorio, sosteniendo que sólo ha traído males al país porque, como suele ocurrir, a través del análisis desapasionado también ha tenido algunos aspectos positivos. Pero sinceramente creo que el balance de la experiencia de tantos años de servicio militar obligatorio no ha sido positivo para nuestro país. Y si alguna duda me quedara al respecto, lo acaecido en la guerra de las Malvinas me la disiparía y vendría a robustecer mi posición en el sentido de que debíamos terminar cuanto antes con esta imposición legal.

Pero así como no quiero —reitero— asumir una posición maniquea, tampoco voy a caer en la deificación del servicio militar obligatorio. Se ha recordado aquí al ejército libertador de naciones, y debo decir que ese ejército no estaba formado mediante el servicio militar obligatorio, que ha sido algo muy posterior. Precisamente, señor presidente, la parte buena de este proyecto es la que tiende a suprimirlo.

Como bien recordaba el señor senador por el Chaco, de mi bancada, esta decisión ha creado un gran júbilo entre los jóvenes, entre los estudiantes y entre los trabajadores, a los cuales el servicio militar les provocaba postergaciones y

más de una frustración en su vocación, en sus posibilidades económicas y en sus anhelos de asentarse su vida y formar una familia.

Quiero decir que no hago esta crítica desde el punto de vista teórico, porque yo también hice el servicio militar y recogí mi experiencia personal al respecto. Pero entiendo que el juzgamiento no se debe hacer solamente a través de las experiencias personales sino con un análisis mucho más ecuménico del problema. Y es ése el examen que yo he realizado.

Los jóvenes se han alegrado con este proyecto de ley, pero debemos ser muy claros y decirles las cosas como son: el servicio militar obligatorio no se suprime totalmente, y éste es mi punto de disidencia con este proyecto, sino que subsiste, en el caso enumerado por el artículo 19 del proyecto en examen, cuando no se llegaron a cubrir con soldados voluntarios los cupos fijados de acuerdo con la ley. Pero, de todas maneras, subsiste, y esto me crea una gran inquietud.

Si bien debo reconocer que la intervención del Congreso de la Nación para que se pueda convocar a representantes de una determinada clase para cumplir con el servicio militar obligatorio es un hecho positivo, aun así la imposición que yo estoy objetando subsiste, y no considerando que esto sea algo bueno sino que, en alguna medida, desmerece y opaca el mérito de esta ley.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del H. Senado, senador Faustino M. Mazzucco.

Sr. Solari Yrigoyen. — Tal como está previsto en el texto en análisis, en el artículo 20 se crea lo que se llama "servicio social sustitutorio", al que concurrirán los objetores de conciencia.

El capítulo VII ofrece una cantidad de reparos, que tengo la obligación de señalar. En primer lugar, en los tiempos que vivimos, no me parece apropiado que a los jóvenes que son convocados de acuerdo con el artículo 20 se los aparte del circuito laboral, colocándolos así en condiciones netamente desfavorables frente a los otros miembros de su generación que no tienen que hacer el servicio militar obligatorio.

Estos jóvenes no podrán realizar actividad pública o privada alguna y tampoco podrán ejercer actividad política o sindical.

Estas son cláusulas que, personalmente, considero retrógradas, y me gustaría, y así lo propicio, que fueran suprimidas. Mi propuesta es que, lisa y llanamente, se supriman todos los artículos que van del 19 hasta el 29, inclusive.

Asimismo, no pueden dejar de preocuparme las penalidades a que quedan sujetos quienes cumplan el servicio social sustitutorio. Ellas son tremendamente exigentes y, debo decirlo, hasta aberrantes. En una cantidad de situaciones que están enumeradas en la iniciativa se puede castigar a los jóvenes con prisión de dos a cuatro años.

Por otro lado, el artículo 29 señala que "En tiempo de paz los ciudadanos que cumplen el Servicio Militar Sustitutorio quedarán sujetos en el caso de cometer infracciones, a la jurisdicción federal"; y "en tiempo de guerra o conflicto armado de carácter internacional, quedarán sujetos a la jurisdicción militar, rigiéndose por el Código de Justicia Militar".

Esto, señores senadores, no lo puedo entender ni aceptar; mucho menos cuando el Código de Justicia Militar sigue estableciendo en la Argentina la pena de muerte. Pareciera que siempre olvidamos que esta pena subsiste en nuestro país.

He hecho muchos esfuerzos, y sin ningún éxito, para que esa pena fuera suprimida del Código de Justicia Militar. Inclusive, he solicitado en proyectos que vencieron y que volví a presentar sin lograr siquiera su tratamiento en comisión, que se la sustituya con otra pena severa. Donde figura la pena de muerte había propuesto que se la sustituyera por la sanción que le sigue en gravedad, que es la de treinta años de reclusión.

Entonces, de ninguna manera puedo aceptar que quienes hagan el servicio social sustitutorio queden en algún caso sujetos al Código de Justicia Militar, que prevé la pena máxima.

Aprovecho esta circunstancia para formular votos a fin de que de una vez por todas terminemos aboliendo la pena de muerte y nos ajustemos en un ciento por ciento a lo sostenido por el Pacto de San José de Costa Rica. Creo que hoy en día esa pena hasta adolece del vicio de inconstitucionalidad después de la reforma del corriente año.

Por estas consideraciones, señor presidente, voy a votar en forma positiva el proyecto en general, pero anticipo que desde el artículo 29 al 29 inclusive votaré por la negativa y propondré la supresión de todos esos artículos para que de esta manera podamos decirles con certeza, sin equívocos y con absoluta franqueza y verdad a los jóvenes que el servicio militar obligatorio ha quedado suprimido, que las leyes 531 y concordantes han quedado definitivamente derogadas y que, de aquí en más, regirá en el país el servicio militar voluntario.

Sr. Presidente (Mazzucco). — Se va a llamar para votar.

— Así se hace.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

46

RENUNCIA DEL SENADOR ALBERTO J. RODRIGUEZ SAA

Sr. Branda. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente: tras tomar conocimiento de la solicitud de renuncia formulada por un senador representante de la provincia de San Luis, que obra en las bancas, y dado su carácter solicito que el tema sea tratado en el recinto, si los señores senadores así lo admiten.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el tratamiento de la renuncia...

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — ...presentada por el señor senador Alberto Rodríguez Saá.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Sí, señor senador, si me deja terminar. Hay varios señores senadores que han solicitado la palabra.

En primer término, tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Señor presidente: antes de aceptar esta renuncia indeclinable desearía que, si el señor senador por San Luis está en la casa, ocupe su banca.

Sr. Presidente (Menem). — El señor senador por San Luis no se encuentra en la casa.

Sr. Avelín. — Habría preferido que estuviera.

En este momento quiero rendir homenaje a los hombres de bien, a los hombres que tienen principios y convicciones. Por supuesto, su óp-